



e-l@tina

Revista electrónica de estudios latinoamericanos

e-l@tina es una publicación del
Grupo de Estudios de Sociología Histórica de América Latina ([GESHAL](#))
con sede en el
Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe ([IEALC](#))
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Buenos Aires

Bolivia: consensos sin acuerdo. Para el MAS, llegó la hora de la política

Íñigo Errejón

Licenciado en Ciencia Política e investigador en la Universidad Complutense de Madrid, donde prepara su tesis doctoral sobre el conflicto político boliviano. E-mail: ierrejon@cps.ucm.es

Alfredo Serrano

Doctor en Economía, profesor en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, actual profesor invitado FLACSO Ecuador, y Coordinador Académico del Doctorado en Economía Social en la Universidad Mayor de San Andrés (LA Paz, Bolivia). E-mail: alfredo.serrano@uab.es

Recibido con pedido de publicación: 22 de mayo de 2009

Aceptado para publicación: 10 de junio de 2009

Resumen

Bolivia: consensos sin acuerdo. Para el MAS, llegó la hora de la política

En este artículo se toma la crisis por la aprobación de la Ley de Régimen Electoral Transitorio, en abril del año 2009, como un breve estudio de caso para analizar la correlación de fuerzas en el escenario político boliviano, y los posibles horizontes de futuro.

Lejos de ser leídos como avances en la senda de los consensos, los últimos acuerdos y la relativa disminución del conflicto, se argumenta, deben ser entendidos como muestra del “agotamiento discursivo” de ambos polos: el bloque indígena y popular hegemónico, y las élites tradicionales.

A su vez, el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido en el gobierno, se ve frente al reto de hacer política; ya no en el sentido de interpretar y materializar las demandas populares, sino en el de proponer nuevas consignas de convergencia de los sectores subalternos en un renovado programa de cambio.

Para terminar, se apuntan algunos de las tareas más urgentes que deben ser acometidas para el avance del proceso.

Palabras clave: ley electoral; crisis del Estado; hegemonía

Summary

Bolivia: consensus without agreements. For the MAS, it's time for politics

In this paper, the crisis of the Transitional Electoral Regime Law's passing, in April 2009, is taken as a brief case study to analyze the forces correlation in the Bolivian political arena, so as the possible future horizons.

It is stated that far from being read as progresses in the track of the consensus, the last agreements and the relative de-escalation of the conflict, have to be understood as an indicator of the “discursive exhaustion” of both poles: the hegemonic indigenous and popular block, and the traditional elites.

Also, the Movement Towards Socialism (MAS), party in the government, is challenged by the necessity of practicing politics; not anymore in the mere sense of interpreting and implementing the popular demands, but also in proposing a renovated transformation program for the subaltern sectors to merge around.

Finally, some of the most urgent tasks for the advance of the political change process are pointed.

Keywords: electoral law; crisis of the State; hegemony

Bolivia parecía haber estado de resaca después de tanto embriagante consenso. Desde los últimos acuerdos adoptados, a finales del año pasado respecto a los 144 artículos de la Constitución, todo parecía estar en una calma absoluta. Incluso durante el referendo constitucional del 25 de enero de este año, nada parecía alterarse después de tanto acuerdo alcanzado desde la llegada al gobierno de Evo. Fueron muchos los consensos en este periodo: la ley especial de Convocatoria para la Asamblea Constituyente (marzo 2006), el artículo del sistema de votación en el reglamento de la Asamblea (febrero 2007), partes del texto constitucional con la conformación de una comisión supra-partidaria y posteriormente por una de Comisión Especial de Consensos del Congreso (julio 2007), y el consenso de Cochabamba (octubre 2008) donde se pactaron otros muchos artículos.

Los temas acordados no fueron nada desdeñables, y sin embargo, han sido eclipsada intencionadamente por los medios de comunicación para dar señales equivocadas de autoritarismo y no de dialogo. Algunas sustanciales concesiones que hizo el MAS fueron las siguiente:: a) inclusión de la definición del Estado como Social de Derecho (propuesta de la oposición y no del MAS), b) en el artículo 3, entró el concepto de “nación Boliviana” rompiendo con el principio de Plurinacionalidad que se pone en el primer artículo, c) bicameralismo (cuando la propuesta del MAS y de las organizaciones hablaban de unicameralismo), d) incorporación en todo el texto de los dos tercios de la Asamblea Legislativa para la elección de autoridades o la aprobación de leyes, e) en el artículo 191, se desvirtúa totalmente la justicia indígena, que deja de estar en igualdad con la ordinaria, y el artículo 197 elimina la paridad de la justicia ordinaria y la indígena en el Tribunal Constitucional Plurinacional, f) compatibilización de estatutos autonómicos (al margen de la legalidad) con el capítulo de Autonomías de la Constitución, rebajando la importancia a la autonomía indígena y ensalzando la departamental, g) en el artículo 399 específica que la prohibición de latifundios sólo será para tierras adquiridas a partir de la entrada en vigencia de la Constitución (no modifica nada de la distribución de la tierra hasta entonces), y h) el modelo económico se concibe como plural (artículo 306) tal como había propuesto el informe por minoría de la oposición durante la asamblea Constituyente. Estos son algunos claros ejemplos que los consensos son frutos de fuertes cesiones y de una actitud de apertura al dialogo por parte de un proyecto que tenía la mayoría suficiente (e histórica) para proponer un nuevo programa de cambio con todo el aval democrático que se requiere.

Puede que hubiera dos motivos para tanta resaca de consenso: agotamiento por tantos disensos o satisfacción absoluta por los acuerdos. Pero de una manera u otra, el actual gobierno ha alcanzando más consensos en Bolivia que en las últimas décadas a pesar de disponer de mayoría absoluta en las elecciones (54 %), mayoría absoluta para la asamblea constituyente (51 %), mayoría absoluta en el revocatorio (67 %) y mayoría absoluta en el referendo constitucional (62 %).

Estos resultados denotan la revalidación del mandato del Presidente Evo Morales por histórica mayoría en diferentes instancias democráticas. La derecha tiene poco que hacer ante este panorama de respaldo mayoritario al proyecto masista. Esta condenada a seguir empecinada en un proyecto regional, pero sin visión de país. Además, el respaldo internacional de los gobiernos del subcontinente -con Brasil a la cabeza ejerciendo de potencia regional que vela por la estabilidad- al Gobierno, la firme postura de UNASUR y el decidido compromiso de los pueblos de Bolivia frente a la reacción, desaconsejaron cualquier salida golpista por parte de la oposición. Esto no quiere decir, sin embargo, que ese horizonte haya desaparecido del imaginario de unas élites que aún viven como usurpación la presencia de un indio en el Palacio Quemado. La derrota de lo que el Gobierno ha llamado el “golpe cívico-prefectural” de septiembre del pasado año dejó a la derecha desnuda. Desnuda de programa político y liderazgo a escala nacional. Desnuda también de representantes que le puedan disputar el liderazgo al Gobierno de Evo Morales.

Y después de tanta tormenta, vino la calma. Sin embargo, cuando parecía que Bolivia navegaba por una balsa de aceite, volvieron las tempestades. Esta vez, tocó el turno a la Ley Transitoria

Electoral, cuya aprobación constituye, por razones obvias, un choque fundamental y decisivo entre el gobierno y la oposición. Fundamentalmente porque esa ley definirá las fórmulas matemáticas, que sin neutralidad alguna como en cualquier sistema político sucede, regirán la confrontación electoral del próximo diciembre.

En esos comicios deberá decidirse la Presidencia del Estado y el Gobierno, en lo que parece que será un plebiscito –uno más- sobre la continuidad de Evo Morales. Así lo afronta una derecha que ya se afana en construir un difícil frente común que aglutine a representantes de los moribundos partidos políticos tradicionales; como la cara aymara del neoliberalismo Víctor Hugo Cárdenas, la derecha regionalista del oriente (Rubén Costas y compañía), la socialdemocracia con aval europeo de Carlos Mesa –ya retirado porque sus cálculos electorales no eran los más propicios-, el acabado Jorge “Tuto” Quiroga, el pretendido centro de Unidad Nacional con Samuel Doria Medina, y a diferentes líderes locales que se han ido descolgando del MAS por diferencias personales o ambiciones de liderazgo no satisfechas, como es el caso de Alejo Véliz (PULSO) o René Joaquino (por Alianza Social). El último candidato en anunciarse ha sido Román Loayza, fundador y figura emblemática del MAS, antiguo jefe de la bancada masista en la Asamblea Constituyente. Las diferencias –sin duda ambiguas, quizás más de índole personal- con la dirección del Instrumento Político le llevaron a hacer críticas públicas a la dirección del MAS y a amenazar con su candidatura independiente de no ser escuchado. En el clima presente de polarización política, esto equivalió a una traición, y Loayza ha sido defenestrado por el MAS y los sindicatos campesinos, que le prohíben hacer campaña allí donde están asentados.

El cemento de tan variopinta coalición es, en exclusiva, el rechazo a Morales y al huracán masista que amenaza con jubilarlos a todos –aunque algunos ya lo fueron-, con fuerte apuesta regional más que por elección, por carencia de un proyecto de país.

A principios de abril de este año, el Senado, cámara territorial controlada por la derecha, rechazó el proyecto de Ley electoral aprobado previamente en el parlamento. Lo hizo, además, tratando de dilatar lo más posible el procedimiento acercándose a la fecha límite (establecida por la constitución). A medida que el plazo se agotaba, se convocaba al Congreso (el parlamento más el senado) para tratar de concertar un proyecto satisfactorio para todos los actores políticos. Los puntos centrales de desencuentro fueron cuatro.

En primer lugar, las circunscripciones especiales indígenas a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que según la propuesta del MAS debían ser 14, uninominales, y con candidaturas avaladas por las organizaciones indígenas CIDOB y CONAMAQ. La derecha se negaba a este aval para poder presentar candidatos ajenos a las comunidades. Pero negaban incluso, sus sectores más radicales, a que hubiese tales circunscripciones, o establecían criterios numéricos que prácticamente las reducían a cero. El argumento sostenido para tal negativa era propio del liberalismo clásico, y aducía que tal configuración del sistema electoral sobrerrepresentaba a actores a los que se reconocían derechos de participación política no sólo en tanto que “individuos” sino también como colectividades territorializadas.

El segundo desencuentro se producía con respecto a los referendos autonómicos y regional (el Gran Chaco) que el Gobierno quiere celebrar en los Departamentos que votaron por el no en su momento. Su proyecto es que ahora lo hagan afirmativamente, para desarrollar un proceso autonómico en todo el país que arrebatase a la oposición su estandarte máspreciado y casi único. La oposición quería retrasar a cualquier precio los referendos departamentales para perpetuar un sistema de autonomías de “dos velocidades”, que remarcará la diferencia política y de poder de gestión de los departamentos de la llamada “Media Luna” (departamentos opositores de oriente del país). Y menos

aún aceptar un referendo regional del Gran Chaco (que comprende Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca) que vacíe de competencias a los departamentos de oriente respecto al control de los recursos naturales más preciados para el país.

El tercer obstáculo para la concertación se encontraba en el voto en el exterior. El Gobierno y el MAS buscaban fórmulas que permitieran por vez primera su participación en las elecciones de diciembre. La derecha, una vez más, también se opuso a ello. Los únicos argumentos provistos giraban entorno a: 1) un supuesto fraude que se iba a venir, 2) una supuesta veta electoral para el gobierno, y 3) supuestas objeciones técnicas. Todo sin sustento alguno, y sin ningún informe que lo avalara, pero promoviendo la desconfianza a que “el gobierno introduzca, vía valija diplomática, votos fraudulentos en el país”, como dijo en la noche del Jueves 9 de abril el líder de PODEMOS y ex presidente heredero del ex dictador Hugo Bánzer, el ingeniero Jorge “Tuto” Quiroga. Antepusieron sus cálculos electorales del exterior a cualquier razón democrática.

Pero la objeción en la que la oposición, las oposiciones, se parapetaron, fue en la cuestión del Padrón Electoral. A pesar de que fue basándose en ese mismo padrón que los prefectos del oriente realizaron sus referéndums ilegales, en esta ocasión este punto fue escogido como la mejor arma contra un proceso electoral que, reconocen, no pueden ganar en diciembre. La maquinaria mediática asociada a las élites económicas, que controlan más del 80% de la prensa y la televisión, nunca ha formulado una acusación concreta y documentada contra el padrón, pero sí ha desplegado una larga campaña de desprestigio del mismo, sobre la que retumban las acusaciones de los políticos de la derecha de que el gobierno está preparando un fraude. En plenas negociaciones en el Congreso, sin embargo, la Corte Nacional Electoral, explicó que el Padrón ha sido revisado en diversas ocasiones por técnicos internacionales que le conceden una consistencia del 97%. También señaló que se podía mejorar cruzando los datos con los del registro civil, pero que hacerlo de nuevo sería muy costoso, tardaría un año aproximadamente y el resultado sería menos fiable. Los senadores y parlamentarios de la derecha le acusaron de estar “vendido” al Gobierno, mientras que los prefectos y “Comités Cívicos” del Oriente se ponían a trabajar recolectando firmas para un referéndum sobre el cambio del padrón, que no se sabe si se celebraría con los mismos datos que se impugnan.

En esta confrontación, el MAS cedió en primera instancia, y también en segunda. En primera, porque se aceptó el reempadronamiento del 30% del electorado (casi 700.000 votantes) para subsanar cualquier irregularidad posible (por ejemplo, las duplicaciones de inscripción). Una vez solventada la enésima petición de la oposición, se venía la siguiente zancadilla. Tocaba hablar del empadronamiento biométrico para la próxima contienda electoral.

Cuando el jueves 9 de abril el Presidente de la República, Evo Morales, se declaró en huelga de hambre junto con los dirigentes de la Central Obrera Boliviana y la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, entre otras organizaciones, hizo temblar el tablero político boliviano. Desde ese momento se generalizaron piquetes de huelga de hambre por todo el país, pasando ampliamente de los dos mil huelguistas durante el fin de semana. Con la huelga de hambre, Morales consiguió al menos dos objetivos. En primer lugar retomó y reforzó los vínculos entre movimientos sociales y Gobierno, que se habían agrietado por ciertas concesiones a la derecha durante el proceso de negociación, como en el caso de la reducción de escaños indígenas. En segundo lugar, también truncó los planes de la oposición, en el sentido de que internacionalizó el conflicto haciendo pasar a un segundo plano mediático las quejas y denuncias de la derecha (como ya lo hizo en las muertes de campesinos en Pando cuando expulsó al embajador estadounidense).

Cuando el bloqueo institucional parecía crónico, la presión ejercida por dicha huelga de hambre y una división en las filas de los diputados y senadores de la oposición posibilitaron un

acuerdo. Evo Morales accedió a la conformación de un nuevo Padrón electoral biométrico, dando de nuevo síntomas de querer máxima democracia (solo se dudaba por una cuestión de tiempos). Esto eliminó cualquier otra posible excusa de la oposición para no más bloqueos en el camino, ni más razones para no concertar la ley electoral que permitirá a los y las bolivianas elegir Presidente y Vicepresidente, así como Asamblea Legislativa Plurinacional (antiguo parlamento, ahora compuesto por 130 diputados: 70 provenientes de circunscripciones uninominales, 53 de plurinominales y 7 circunscripciones especiales indígenas) y Senado (de nuevo cámara territorial con 36 senadores, cuatro por departamento), en diciembre.

En el acuerdo, el MAS cedió reducir el número de circunscripciones especiales indígenas de 14 a 7 –lejísimos de las 18 propuestas por las organizaciones de originarios del oriente boliviano, que también se quedaron sin su derecho de aval exclusivo a estos candidatos. Se instala una circunscripción especial, diseñada para representar a las minorías indígenas de cada departamento, en siete de los nueve que existen en el país: Chuquisaca y Potosí cedieron las suyas en aras del consenso. También se renunció a la paridad de género en las listas, con el argumento de que de esa forma la derecha pretendía invalidar el tándem Evo-Álvaro para las presidenciales.

Los referendos autonómicos se celebrarán el mismo 6 de diciembre, en los departamentos que votaron por el “no”, ahora llamados por el gobierno a cambiar el sentido de su elección para privar a las élites regionales orientales de la única bandera con capacidad de arrastre de masas que les queda. Es hora de Autonomía para todos, también en el nivel departamental. La cuestión de las autonomías en sus diversas escalas, y de la reestructuración del modelo territorial de Estado, sin embargo, dará sin duda mucho más que hablar en los próximos meses. En la crucial pugna por la reforma de la geografía del poder en el país el gobierno encontrará, de nuevo, la férrea oposición de unas élites en retroceso, atrincheradas en el oriente.

La razón de tantas renunciaciones por parte del Gobierno es el optimismo de cara al futuro. Pareciera que cualquier salida al bloqueo institucional con el que la derecha lleva impidiendo el desarrollo de la nueva Constitución sea necesariamente para mejor.

Durante la celebración de la aprobación de la ley, Evo Morales solicitó al movimiento popular un 70 % de apoyo de caras a las nuevas elecciones presidenciales para gobernar sin ataduras ni chantajes de la derecha. Cálculos gubernamentales parecen indicar que con algo menos se conseguiría el mismo efecto. Está por ver, en todo caso, que tanta concesión en la fórmula no produzca un escenario de difícil institucionalización de la hegemonía indígena y popular.

En definitiva, después de tantos consensos, vino la resaca que volvió a ser interrumpida por lo de siempre: la oposición oponiéndose a lo que fuera. El MAS -y con Evo a la cabeza- volvió a dar señales de ultrademocrático, con una nueva búsqueda de consensos. El problema de este esquema no son –por graves que vienen siendo- las cesiones a las antiguas élites, revitalizadas por los errores y complejos del gobierno. El verdadero peligro es jugar al consenso con una clase dominante que nunca aceptará ninguna inclusión subordinada, ni más resultado que la reacción. Esperemos que el tiroteo y detención de mercenarios ligados a las reivindicaciones secesionistas de Santa Cruz, con arsenal de guerra, no sea la enésima prueba de que el gobierno baila consenso mientras la oligarquía toca melodías de guerra.

Vista con la perspectiva de varias semanas, la crisis no fue un gran choque entre las fuerzas del cambio y las de la conservación. Pero tampoco fue un mero simulacro. Se trató más bien de una señal. Un reflejo de una pugna irresoluta, pero agotada en los términos en los que ha venido librándose hasta ahora.

Para el observador ajeno a la realidad política boliviana, la huelga de hambre de los dirigentes sindicales junto con el Presidente Morales, la desertión del parlamento de parte de los diputados y senadores de la derecha, las declaraciones inflamadas...pueden parecer señales de una explosión inminente. Ese no es, sin embargo, el caso en Bolivia, al menos por el momento. Evidentemente la polarización política es más que elevada, dibujando un escenario de conflictividad alta, como es de esperar en todo proceso de transformación estructural que altera los intereses de grupos históricamente privilegiados. Sin embargo, esta sacudida no ha sido especialmente virulenta en comparación con la historia reciente de Bolivia. No lo ha sido no por ningún proceso de acercamiento entre las viejas élites y el bloque indígena y popular, que siguen siendo antagónicos, sino por la escasez coyuntural de nuevos terrenos sobre los que confrontar, de nuevas propuestas con las que chocar.

Las fracturas regionales, azuzadas por la derecha, no han resultado tan fructíferas como se esperaban: ayudan, en efecto, a construir un poderoso parapeto frente a las políticas gubernamentales de redistribución de la riqueza, pero impiden construir un contra-liderazgo nacional. El parapeto protege a la vez que encierra, que inmoviliza. La derecha boliviana, que en realidad son las derechas, no parece vislumbrar caminos intermedios entre la hasta ahora fallida conspiración contra la institucionalidad y la pugna electoral impotente contra “el indio”. En esas condiciones, sus obstáculos a las elecciones de diciembre son las pataletas del condenado. La insólita decisión del gobierno de entrar en el pantanoso terreno de la confección de un padrón biométrico multimillonario -financiada en parte por la cooperación y el resto con cargo al tesoro General de la Nación-, gestionado por una empresa privada extranjera, parece haber obedecido, en efecto, a que cualquier renuncia valía la pena a cambio de obligar a la oposición a concurrir a una batalla que ha intentado evitar –o al menos retrasar- por todos los medios.

En las filas del gobierno y de las organizaciones sociales, por su parte, la centralidad y urgencia permanente es la cuestión electoral. Sin discutir que es una necesidad obvia, también puede suponer una manera de no afrontar la carencia de programa político. Bajo el eufemismo “revolución democrática y cultural” se esconde la desorientación con respecto a las vías y los límites de un proceso de democratización, descolonización cultural y nacionalismo económico que ha vivido, hasta ahora, del oxígeno discursivo producido por las insurrecciones multitudinarias del pasado “Ciclo Rebelde”. No se ha hecho el suficiente esfuerzo, que no propagandístico, para situar los próximos pasos potenciales de un proceso riquísimo, complejo y extremadamente desafiante. Las difíciles intersecciones entre las diferentes líneas de subordinación que el proceso político se propone enfrentar (naciones originarias versus estado colonial, trabajadores *vs* capital, soberanía *vs* dependencia, autonomía regional *vs* estado plurinacional, más capitalismo *vs* economía social comunitaria) sólo encontraron articulación en el pasado en torno a la defensa de los recursos naturales y bienes comunes (gas, agua, tierra y coca) y a la asamblea Constituyente –ya constituida. Hoy se articulan y a duras penas trabajan juntas gracias al liderazgo carismático de Evo Morales, verdadero catalizador de la multiplicidad de insurgencias abigarradas en el presente tiempo histórico. Pero los roces al comenzar a caminar, las indefiniciones y vacilaciones frente a las fuerzas reaccionarias, permiten entrever lo inacabado de la hegemonía indígena y popular. Esta hegemonía no sólo se ve constreñida por la debilidad del estado boliviano y sus inercias históricas. También sufre de falta de conceptos políticos nuevos que ejerzan de núcleo aglutinador. Por decirlo de forma simple: de programa revolucionario que decida sobre el estado, sobre las contradicciones de clase, sobre la resistencia de las élites económicas, sobre la cuestión de la plurinacionalidad en contraste con la necesaria eficiencia estatal.

En la larga crisis estatal boliviana, el gobierno del MAS puede ser sólo una etapa más, en la que el recuerdo de los altísimos costes sociales del modelo neoliberal sustente a un gobierno de izquierdas. Pero hay potencialidad política para mucho más. La impugnación del estado colonial y oligárquico, abierta desde la victoria popular en Cochabamba en el año 2000 contra la mercantilización del agua, no es un proceso coyuntural. El Gobierno del Movimiento Al Socialismo y Evo Morales accedió al poder como testaferrero de la política de las multitudes bolivianas. Su permanencia, a día de hoy, no depende ya sólo de que sea fiel al mandato popular. Tampoco de que derrote muchas veces a la derecha en las urnas.

Hoy, por la propia inercia gubernamentalista, por el componente estatista del nacionalismo boliviano, y por la simplificación extrema del campo político entre “oficialistas” y “opositores”, es el MAS –junto con las organizaciones sociales y sindicales, pero bajo su impulso– quien debe actuar como catalizador y propositor de una nueva agenda política. Una agenda que de nuevo ponga a caminar con brío y en común a los diferentes sectores subalternos, en dirección a una reconstrucción estatal que solucione el divorcio histórico entre el estado y los pueblos de Bolivia.

No hay más excusas. Ni la coyuntura electoral –tan presente en Bolivia desde que ganó el MAS–, ni los efectos de la crisis internacional, pueden posponer más el momento del cambio, más allá de las pertinentes demandas del pasado: recuperación de los recursos naturales y asamblea constituyente. Es hora de enfrentar los problemas estructurales acumulados en el tiempo. Es hora de desmontar el Estado colonial y de romper con la dependencia. Sólo así se puede profundizar el proceso de cambio más allá de las sucesivas contiendas electorales.

El diseño de un nuevo modelo de estado, el llamado “plurinacional, autonómico y comunitario” tiene que ser una oportunidad de hacer convivir varias territorialidades y sujetos colectivos, en tanto que tales, en una misma estructura política. No se trata de importar modelos estatales, ni de hacer que el Estado republicano “incluya” a minorías. Porque no hablamos de minorías sino de mayorías sociales originarias, históricamente puestas frente a la disyuntiva de renunciar a sus formas culturales y de organización social y política para integrarse en un Estado que respondía a la matriz cultural y a la experiencia histórica de las minorías blancas del país.

Es hora de la verdadera construcción de un Estado plurinacional. El anterior modelo se vestía de universal para tapar particularidades eurocéntricas, y el nuevo tendrá que reconocer la diversidad cultural y civilizatoria en el país, no para integrarla en tanto que diferencias, sino para erigir desde ella una forma plural y diversa de organizar la convivencia entre las diferentes naciones que componen Bolivia, con autodeterminación y solidaridad. El reto es hacerlo sin retroceder, sino avanzando, en la redistribución de la riqueza y en la afirmación de la soberanía económica y la independencia política.

La transformación política debe necesariamente apuntar, como su segundo pilar, a la reorganización económica, enfrentando la herencia dejada por el “modelo neoliberal”, particularmente la derivada del manejo aperturista, privatizador y liberalizador de las últimas décadas. Bolivia requiere un nuevo programa de transición que sienta las bases para un nuevo régimen de acumulación. Es hora de dar respuestas de corto plazo que se enmarquen en una estrategia de largo aliento para atender a las demandas estructurales. Es hora de aplicar políticas estructurales de distribución de los medios de producción, de la tierra y de la riqueza, acompañada con políticas redistributivas de los ingresos. Resulta imprescindible un proceso deliberado, planificado, de reorganización productiva. Es hora de una estrategia que contemple tanto la sustitución de importaciones, como la diversificación (en productos y en destino) y también la sustitución de las exportaciones tradicionales, sobre todo aquellas propias de una economía extractivista, con el

Bolivia: consensos sin acuerdo. Para el MAS, llegó la hora de la política
Íñigo Errejón y Alfredo Serrano

fomento de industrias nacientes -con fuerte presencia de los pequeños y medianos productores y del Estado cuando fuera pertinente.